

# El Comercio

EDITORIAL

## El reto de sostener y mejorar los niveles de empleo formal

Finalmente, se logró lo que parecía casi imposible y el pasado mes de mayo alcanzamos los dos dígitos en crecimiento del empleo formal urbano: 10% en comparación con igual mes del año anterior, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Podría haber factores estacionales, pero estos no explican por sí solos este histórico incremento. Además, estas cifras son compatibles con las de otros reportes privados como el MEMO (Medición y Monitoreo) y el índice de gestión del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).

No hay que ser mezquinos para reconocer que esto no es gratuito. Han confluído aquí el gran esfuerzo del Gobierno por mejorar el clima y las condiciones para la inversión, así como el compromiso más acusado del sector privado para aceptar el reto de hacer empresa y ser más competitivos.

Solo así hemos conseguido 71 meses de crecimiento con-

tinuo, sobre todo en los sectores comercio (15,9%), servicios (10,2%), extractivo (8,8%), industria (8%) y transportes y comunicaciones (7%).

Pero, no podemos dormirmos en los laureles, pues queda aún mucho por hacer para remontar los aún notables niveles de desempleo y de empleo informal. Por lo pronto, los ajustes a las leyes de microempresa y pequeña empresa apuntan a mejorar el dinamismo y la formalidad de este tipo de organizaciones, con lo que sus empleados podrían ser más y gozar de mayores beneficios.

Para crecer necesitamos también un clima de consenso y de estabilidad política. Y, dentro de las prioritarias políticas de descentralización e inclusión, si bien hay que consolidar los programas sociales, es evidente que a largo plazo la política asistencialista debe ser gradualmente reemplazada con empleos dignos para las mayorías, en las zonas urbanas pero también en las rurales.

## La escandalosa e inconcebible invasión del bosque de Pomac

La escandalosa invasión del Santuario Histórico Bosque de Pomac de Lambayeque, que nuestro Diario ha denunciado, pone nuevamente sobre el tapete lo poco que valoramos la intangibilidad de nuestros espacios naturales.

Resulta inconcebible que se hayan talado decenas de hectáreas de algarrobos y zapotes, aduciendo que allí se desarrollarán cultivos de exportación, lo cual es solo un pretexto para la ilegal invasión de zonas intangibles, patrimonio de la nación.

¿Y qué otros recursos naturales, arqueológicos o históricos podrían ser arrasados en nombre de un supuesto desarrollo que solo beneficia los bolsillos de una gavilla de invasores?

Al Instituto Nacional de Cultura y a la justicia no debe temblarles la mano a la hora de sancionar a los traficantes de tierras que hicieron su agosto cuando sorprendieron a un grupo de campesinos, vendiéndoles nada menos que una parte del bosque de Pomac.

Ellos fueron engañados, pero hoy tampoco pueden reclamar propiedad sobre un santuario histórico que no les pertenece. Por ello, lo que corresponde, porque así lo manda la ley, es que sean desalojados de inmediato del área que ilegalmente ocupan.

### POLÉMICA

## Por un gobierno de todos

Carlos Ferrero

Ex presidente del Congreso



La diversidad de opciones políticas en nuestro país es principalmente resultado de nuestra fragmentación social. Hay muchas tendencias, pluralidad de culturas, intereses contrapuestos y escasa voluntad para unir esfuerzos sacrificando individualismos.

Lo que venimos viviendo los últimos años incluso ahora mismo hace percibir que esta situación no ha de cambiar por lo menos en las dos décadas siguientes. El próximo Gobierno tampoco tendrá mayoría en el Congreso y seguirá siendo complejo resolver nuestros graves problemas comunes.

Tenemos la complicada costumbre según la cual el ganador de las elecciones gobierna básicamente con su partido y bus-

ca alianzas que son inestables porque los grupos añadidos no comparten el Poder Ejecutivo y son normalmente esquivos y temporales.

Por tanto, debemos abrir la posibilidad de que en el futuro cercano se formen 'gobiernos de todos', consiguiendo que terminado el proceso electoral el ganador convoque a los perdedores a integrar el Poder Ejecutivo, de manera que el mayor número de ex competidores participen del Gobierno, dentro de una relativa proporcionalidad de los votos obtenidos.

Comprendo que nuestra idiosincrasia hace difícil que el vencedor quiera compartir su cuota de poder recién adquirida y también complicado que los perdedores estén dispuestos a asumir el desgaste que todo mandato produce.

Sé también lo arduo que resulta empatar en el trabajo concreto las divergencias ideológi-

cas aparentemente irreconciliables. Sin embargo, considero que con respecto a los grandes problemas nacionales sí es posible que nuestros dirigentes políticos puedan concordar una política general. Por ejemplo en salud, descentralización, infraestructura, control inflacionario, lucha anticorrupción, etc. ¿No existe acaso un consenso básico entre la inmensa mayoría de los peruanos? La experiencia de la Mesa Directiva concertada que integraron todos los partidos durante tres años en el Congreso (2001-2004) me hace no ser pesimista.

Lo que está ocurriendo es que cuando el ganador de una elección concentra el poder, no solo margina completamente a los perdedores, sino que en la práctica los empuja a una oposición más recalcitrante, entre otras razones porque les resulta más cómodo no compartir los riesgos y responsabilidades que implica el ejercicio diario del poder.

En la campaña para el 2011 deberíamos lograr que los contendores se comprometan públicamente a que si ganan, compartirán el poder con los perdedores que así lo acepten. Y si pierden aceptarían integrar el Ejecutivo que presida el ganador.

Si todo el país lo solicitara y si la opinión pública apoyara tales compromisos, los políticos tendrían que cumplirlo y aquel que no lo haga se atendería a su consecuente descrédito.

¿Acaso no vale la pena intentarlo? En las décadas que vienen solo los 'gobierno de todos' podrán afrontar con éxito los inmensos retos que tanto nos agobian y tanto nos dividen.



ILUSTRACIÓN VÍCTOR AGUILERA

### EL HABLA CULTA

Por Martha Hildebrandt

**ULTIMADAMENTE.** Adverbio formado sobre *ultimado*, participio del verbo *ultimar*. Documentado en un texto de Cervantes, *ultimadamente* ha caído en desuso en la lengua general (pero el DRAE 2001 lo registra como vigente). Se conserva en el habla de Méjico, desde donde ha llegado al Perú a través del cine y la televisión. *Ultimadamente* se usa más en una de sus dos acepciones, la de 'por último'. En *últimamente* predomina la acepción de 'en los últimos tiempos'.

### rincón del autor

Jaime de Althaus Guarderas



Son todos intereses del pasado, de las estructuras más atrasadas y parasitarias del país. Es su resistencia al cambio, a la segunda ola de reformas modernizadoras

## La resistencia a las reformas

En el Perú hay, políticamente hablando, dos países: uno que crece y se integra cada vez más al mercado interno y mundial y otro dedicado a sabotear al primero. Este segundo es el que organizó el llamado paro nacional, que fue una confluencia de paros disímiles, algunos de ellos dentro de la lógica del primer país, que lucha por más recursos públicos que le permitan integrarse mejor pero

otros, los más organizados, pugnando por defender prebendas excluyentes del orden populista anterior o sencillamente por torcer el rumbo económico que nos está permitiendo crecer a tasas altas

Es asombroso, por ejemplo, que el sindicato de construcción civil proteste en medio de la tasa de crecimiento de la construcción más alta de la historia del Perú. En abril esta se expandió en ¡33,9%! Hay tanto trabajo en ese sector que quizá por eso quieran descansar, o pueden darse el lujo de hacerlo. Pero más

asombroso aun es que el mencionado sindicato suscriba una plataforma cuya consecuencia inmediata, si se aplicara, sería paralizar la construcción y enviar a sus casas a los trabajadores sin esperanza de recontrato. Pues no a otra cosa conduciría la cancelación de los recursos estratégicos. La inversión se retraería de manera drástica y regresaríamos a la angustia feroz del país viable.

No obstante, el contingente más grueso de las movilizaciones en el interior estuvo formado por

"Requerimos cambiar la legislación laboral para que facilite, y no desincentive, la creación de empleo [...]. Para participar en la cadena exportadora que ofrece el TLC las empresas tienen que ser formales. Tenemos entonces que formalizar a los cientos de miles de microempresas y pequeñas empresas hoy informales que dan empleo a la mitad de nuestra fuerza laboral". EDITORIAL DEL COMERCIO / 1 DE JULIO DEL 2007

### HUMOR PROFANO

Por Molina

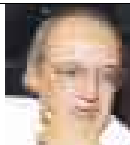


### LA ECONOMÍA GLOBAL Y LA FALTA DE RESPUESTAS

## ¿El G-8 combatirá la crisis?

Alejandro Deustua

Internacionalista



Los tiempos en que los países industrializados coordinaban políticas para gestionar crisis económicas internacionales parecen haber terminado. A esta conclusión se podría arribar luego de que la reunión del Grupo de los 8 culminara sin la adopción de ninguna medida concreta para atajar la compleja situación económica global.

En efecto, en Japón, los titulares de esa organización han preferido reiterar ciertos principios (apertura y transparencia de mercados) en cada tema crítico antes que patrocinar algún tipo de control sobre la multidimensional crisis económica que afecta a las potencias centrales y se traslada al resto del mundo.

En lugar de ello, se ha adoptado un compromiso genérico para rebajar hacia el 2050 en 50% las emisiones de gas que contribuyen al calentamiento global sin establecer acuerdos de implementación. Aunque ese compromiso parece más bien un insumo para la conferencia internacional sobre cambio climático que se realizará en Dinamarca el próximo año, este es obviamente excéntrico a la grave proble-

mática económica del presente.

En efecto, juzgar por su laxitud en el trato de la crisis, el G-8 no solo parece haber optado por el horizonte de largo plazo para lidiar con su impacto, sino que parece haber declinado la responsabilidad de su disminuido poder colectivo para trasladarla a las economías nacionales. De ese tipo de indecisión no escapa el diálogo sostenido con el G-5 (Brasil, México, China, India y Sudáfrica), que confirma el proceso iniciado el año pasado en la cumbre del G-8 en Alemania.

Sobre el papel desempeñado por estas potencias emergentes debe decirse que, si bien su agenda incluyó la problemática del desarrollo sostenible, la energía, los alimentos y el cambio climático, sus miembros se han comportado más como una nueva instancia de poder que como representantes de sus regiones de origen (en el caso del Brasil, como ocurre también en la OMC, las consultas con sus pares sudamericanos son difíciles de identificar).

Si ello confirma la crisis de gobernabilidad internacional en pleno proceso de globalización (que algunos recién reportan), también da cuenta de la incapacidad hegemónica de restablecer la estabilidad económica. Y contrasta con la voluntad que los países in-

dustrializados ejercieron en las inmediaciones del proceso desregulador patrocinado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

En efecto, cuando la economía internacional corría el riesgo de perder el impulso de la recuperación estadounidense y de agudizar la incertidumbre en las grandes potencias, estas cooperaron para intervenir en el mercado para devaluar el dólar, que produjo luego un alineamiento cambiario que estableció parámetros para la libre flotación (los acuerdos del Plaza y de Louvre de 1985 y 1987). Hoy, a pesar de que la necesidad de la intervención reguladora es evidente frente a la magnitud de los desequilibrios globales, los riesgos de estancamiento y el incremento desmedido de los precios del petróleo y de los alimentos por factores que ciertamente escapan al libre juego de la oferta y la demanda, el G-8 no ejerce su responsabilidad y el G-5 es incapaz de inducir medidas eficaces a pesar de los altísimos costos que la crisis impone a la economía global.

Si en un escenario de creciente complejidad esa responsabilidad es asignada a cada uno de los estados, que nadie se alarme si esta ausencia de cooperación se traslada al ámbito de la seguridad. Los países que se rigen por principios comunes deben poder reaccionar mejor.

■

los maestros del Sutep, el otro pilar de la CGTP. Pero resulta que el Sutep se moviliza con una sola bandera: derogación de la ley de carrera pública magisterial, es decir, del instrumento indispensable para mejorar la calidad de la enseñanza. El Sutep quiere perpetuar la propiedad absoluta de los puestos de trabajo en el magisterio, a costa de los alumnos y padres de familia. Esa protesta es ilegítima, antihistórica, inaceptable.

Pero lo que resulta alucinante es que la plataforma de la CGTP proteste contra el decreto legislativo que establece un régimen laboral y tributario especial para la microempresa y pequeña em-

presa, a fin de que centenares de miles de trabajadores sin derechos puedan acceder a ellos.

Jamás se ha visto movimiento tan reaccionario. Son dirigencias que quieren perpetuar prebendas rentistas remanentes del orden populista anterior: la propiedad absoluta del puesto de trabajo a costa de los usuarios y los consumidores, beneficios laborales exclusivos y excluyentes. También se oponen a la modernización y capitalización de las comunidades campesinas vía su titulación interna y su asociación con empresas privadas para proyectos de forestación, ganadería y otros. Son los pequeños caciques agrar-

ios que intermedian políticamente la pobreza de sus bases, que temen perder sus canonjías.

Son todos intereses del pasado, de las estructuras más atrasadas y parasitarias del país. Es su resistencia al cambio, a la segunda ola de reformas modernizadoras. Lo que no significa que no haya malestar por el alza del precio de los alimentos –de origen externo– y por la percepción de un gobierno alejado y preocupado solo por los grandes. Y que, por lo tanto, no deba el Gobierno cambiar de estilo y bajar al llano para trabajar con la gente entregando instrumentos eficaces directamente al que quiere salir de la pobreza.

■